

INFORME INTERNACIONAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA PERÚ 2012

Resumen Ejecutivo

La Constitución y otras leyes y políticas protegen la libertad de culto, y en la práctica, el gobierno generalmente respetó esa libertad. La tendencia mostrada por el gobierno en relación al respeto por la libertad de culto no varió significativamente durante el año. Algunas denominaciones religiosas continuaron afirmando que los requisitos con los que deben cumplir para su debido registro constituyeron una discriminación contra grupos religiosos no católicos.

Hubo informes que afirmaron que existió una discriminación por parte de la sociedad basada en la afiliación, las creencias o las prácticas religiosas.

Personal de la Embajada de los Estados Unidos se reunió con representantes del gobierno, grupos religiosos y organismos no gubernamentales (ONGs) para discutir y promover el tema de la libertad y la tolerancia religiosas.

Sección I. Demografía religiosa

De acuerdo con un estimado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2010 el país tiene una población de 29,5 millones. El censo conducido por el INEI en el 2007 determinó que un 81 por ciento de la población profesa el catolicismo; el 13 por ciento profesa la religión protestante (principalmente de la rama evangélica) y el 3 por ciento pertenece a otras denominaciones religiosas, entre las que se encuentran los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), los Testigos de Jehová, los Israelitas del Nuevo Pacto Universal, las Asambleas de Dios, los seguidores de la fe judía, de la fe bahai, los hare krishna y los miembros de la fe musulmana. El Centro de Información Israelí para América Latina estima que hay 3.000 judíos viviendo principalmente en Lima y el Cuzco. Existen pequeñas comunidades de musulmanes en las ciudades de Lima y Tacna. Algunos habitantes de la remota selva oriental mantienen creencias indígenas tradicionales. Asimismo, existen comunidades nativas que practican una religión en la que mezclan creencias cristianas y pre-colombinas; algunos católicos que viven en las zonas alto-andinas también comparten ese tipo de creencias.

Sección II. Estatus del respeto mostrado por el gobierno a la libertad de culto

Marco legal y político

La Constitución y otras leyes y políticas protegen la libertad de culto. La Constitución establece la separación de la Iglesia y el Estado pero reconoce el papel que cumple la Iglesia Católica Apostólica y Romana en su calidad de “elemento importante en el desarrollo histórico, cultural y moral de la nación”.

El Poder Ejecutivo interactúa de manera oficial con las agrupaciones religiosas a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). El MINJUS implementa las leyes e interactúa con la población tanto a través de la Dirección de Asuntos Eclesiásticos como de la Dirección de Asuntos Interconfesionales, la última de las cuales se ocupa de las agrupaciones no católicas. Ambas oficinas mantienen un diálogo permanente sobre la libertad de culto con la Iglesia Católica y con otras agrupaciones religiosas organizadas

Una ley sobre libertad de culto promulgada en diciembre del 2010 reconoce el derecho fundamental de toda persona a la libertad de culto, tal como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país. Bajo esa ley, las agrupaciones religiosas registradas obtuvieron muchos de los mismos beneficios tributarios previamente otorgados a la Iglesia Católica. De conformidad con un acuerdo suscrito con la Santa Sede en 1980, la Iglesia Católica recibe un trato preferencial en las áreas educativas y tributarias, así como facilidades para la inmigración de miembros del clero y otros privilegios. La nueva ley estableció un reglamento necesario para implementar este acuerdo. En octubre del 2011 se introdujeron varias modificaciones a este reglamento en un esfuerzo por atender los reclamos hechos por grupos religiosos minoritarios que criticaron la ley, señalando que ésta seguía manteniendo el estatus preferencial de la Iglesia Católica.

El reglamento emitido en julio del 2011 estipula que las agrupaciones religiosas no católicas vuelvan a registrarse en el Ministerio de Justicia dentro de los siguientes 360 días de su emisión, así como que la agrupación religiosa cuente con no menos de 10.000 miembros adultos. Las listas de membresía deben ser certificadas por el Jurado Nacional de Elecciones, un requisito que algunos críticos de esta norma consideraron que contradecía a la Constitución, que consagra el secreto de la fe religiosa.

Las agrupaciones religiosas deben registrarse para poder ser beneficiadas con la exoneración de sus tributos y poder ejercer sus derechos ante a las entidades gubernamentales. Esto incluye la posibilidad de constituir una entidad legal que puede poseer propiedades, establecer una jerarquía y fijar normas dentro de su agrupación, operar colegios religiosos y solicitar y recibir donaciones voluntarias.

Las organizaciones de caridad – tanto católicas como no católicas- no pagan impuestos a la importación. Todos los grupos religiosos están exonerados del pago de impuestos por los lugares de culto. Los edificios, las casas y otros bienes inmuebles de propiedad de Iglesia Católica se encuentran exonerados del pago del impuesto a la propiedad; otras agrupaciones religiosas pueden estar obligadas, dependiendo de la jurisdicción municipal a la que pertenecen, a pagar impuestos a la propiedad por las escuelas y las residencias del clero que poseen. El gobierno permite que los grupos no católicos adquieran terrenos únicamente en zonas comerciales mientras que las iglesias católicas pueden ubicarse tanto en zonas residenciales como en zonas comerciales. Los miembros del clero católico se encuentran exonerados del pago de impuestos por viajes internacionales. Todos los ingresos obtenidos por los sacerdotes y obispos católicos como retribución por su trabajo están exonerados del pago del impuesto a la renta.

El gobierno paga estipendios a funcionarios de la Iglesia Católica, incluyendo al cardenal y a seis arzobispos. Estos estipendios llegan a un total aproximado de 2,6 millones de nuevo soles (\$923,700) al año. Algunos miembros del clero y laicos católicos empleados por la Iglesia reciben una remuneración de parte del Estado, adicionalmente a los estipendios que les otorga la Iglesia. Esto se aplica en el caso de los 44 obispos en actividad, así como en el caso de algunos sacerdotes que sirven en localidades cercanas a las fronteras, estos representan aproximadamente a una octava parte del clero y de los agentes pastorales. El gobierno proporciona a cada diócesis un subsidio mensual institucional.

De conformidad con la legislación, las Fuerzas Armadas únicamente pueden emplear a miembros del clero católico como capellanes.

De acuerdo con la ley, todas las escuelas públicas y privadas deben impartir educación religiosa como parte del currículo durante la primaria y la secundaria, “sin violar la libertad de conciencia del estudiante, los padres o los maestros”. Las escuelas públicas sólo pueden dictar clases de catolicismo. El gobierno exonera a muchas escuelas privadas no católicas, ya sean laicas o religiosas, de cumplir con este requisito. El Ministerio de Educación estipula que el obispo católico con la máxima autoridad dentro de una localidad debe ser quien autorice la contratación

de los maestros de religión en todas las escuelas públicas. Los padres pueden solicitar que el director de la escuela donde asisten sus hijos los exonere de participar en las clases obligatorias de religión.

El gobierno celebra los siguientes feriados religiosos otorgándoles el estatus de feriado nacional: Jueves y Viernes Santo, San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima, la Fiesta de Todos los Santos, la Fiesta de la Inmaculada Concepción y Navidad.

Prácticas del Gobierno

No se reportó ningún abuso a la libertad de culto.

Los miembros de las agrupaciones religiosas minoritarias continuaron criticando el reglamento emitido en julio del 2011 para implementar la ley de libertad religiosa promulgada en el 2010, señalando que éste era discriminatorio e inconstitucional. El requisito que exige que una agrupación religiosa deba contar con no menos de 10.000 miembros adultos efectivamente descalificó a la mayor parte de grupos religiosos. Algunas personas criticaron el requisito impuesto por las normas que exige que el Jurado Nacional de Elecciones certifique las listas de miembros de los grupos religiosos afirmando que este requisito contradice de la disposición constitucional que consagra el secreto del credo religioso. En respuesta a las inquietudes expresadas respecto al reglamento necesario para implementar la ley, en octubre del 2011 el MINJUS publicó un texto modificado que luego publicó en la internet para que pudiera ser comentado. Las modificaciones no eliminaron el requisito del nuevo registro y la controversia continuó.

Antes de que se implementara la nueva Ley de Libertad Religiosa del 2010, las iglesias no católicas que habían operado en el país por no menos de siete años podían registrarse y recibir beneficios similares a los de la Iglesia Católica. A ninguna agrupación religiosa no católica le fue posible cumplir con los estrictos requisitos exigidos para el nuevo registro. Muchas iglesias evangélicas carecían de una línea central de autoridad y de unidad doctrinaria, lo cual complicó aún más el proceso de registro. Para finales de año únicamente la Iglesia Católica se encontraba registrada en el MINJUS.

Las agrupaciones evangélicas –en conjunto- contaban con un número suficiente de miembros para permitirles calificar para el registro. Sin embargo, se negaron a registrarse por un principio de solidaridad con los otros grupos que no podían cumplir con estos requisitos. En octubre, el gobierno extendió el plazo para el

registro hasta el 13 de enero del 2013. Los grupos evangélicos expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que sus misioneros estuvieran en riesgo de no calificar para una visa luego de que expirara el tiempo señalado para el registro. El gobierno mencionó la posibilidad de modificar las normas, pero para finales de año nada indicaba que las modificaciones hubiesen sido hechas.

Aunque el gobierno cobró impuestos por igual tanto a los católicos como a los no católicos en la mayor parte de sus actividades, las agrupaciones no católicas dedicadas a desarrollar muchas acciones caritativas informaron que el gobierno continuó imponiendo tributos a tasas comerciales a los artículos donados desde el extranjero. Algunos grupos de misioneros no católicos señalaron que la ley discriminaba contra ellos al cobrarles impuestos por los materiales religiosos importados, incluyendo las biblias, mientras que a la Iglesia Católica no se le imponía ningún tributo.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas no católicos se quejaron de que les fue difícil encontrar y asistir a un servicio religioso protestante debido a la falta de capellanes.

El gobierno permitió que los grupos de misioneros extranjeros operaran con total libertad. Sin embargo, ellos no recibieron los mismos privilegios que la Iglesia Católica en lo referente a aduanas, inmigración e impuestos.

Las agrupaciones no católicas denunciaron el hecho de que aunque sus miembros estuvieron exonerados de tener que recibir instrucción en la doctrina católica, los estudiantes exonerados perdieron créditos académicos. Sin estos créditos, los estudiantes no pudieron ser parte del tercio superior de su clase, a pesar de contar con otros logros académicos, por lo que estuvieron en una situación de desventaja al momento de competir por una beca o de intentar ingresar a la universidad. Funcionarios del MINJUS señalaron que la nueva ley de libertad de culto se había ocupado de este problema y que el reglamento modificado incluía instrucciones muy claras para prevenir que tales desventajas continuaran existiendo.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad religiosa

Hubo algunos casos de discriminación mostrada por miembros de la sociedad basada en la afiliación, las creencias o las prácticas religiosas.

El movimiento Social Nacionalismo del Perú Andino (SNPA), un grupo anti semita que asegura tener 70 miembros, instó públicamente a que se expulsará a la comunidad judía del Perú e hizo afirmaciones negando que hubiera existido el Holocausto. El SNPA no tuvo la categoría de partido político oficial. La comunidad judía comunicó su preocupación al gobierno y solicitó que detuviera la incitación al odio racial y religioso del SNPA.

Grupos católicos conservadores criticaron una exhibición artística presentada en el mes de octubre en una galería de arte pública que mostraba una estatua de Cristo desnudo, calificando la obra de “blasfema”. Estos grupos conservadores tuvieron éxito en la presión que ejercieron sobre el alcalde del distrito, habiendo logrado que éste cerrara la exposición y despidiera al director de la galería. Representantes de la comunidad artística y algunas ONGs expresaron su preocupación sobre la censura y la libertad de expresión.

Los grupos religiosos ocasionalmente se unieron y participaron en proyectos en favor de los pobres. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas colaboraron estrechamente en el área de los derechos humanos. ONGs tales como la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la Iglesia Católica y Paz y Esperanza — una ONG con conexiones con la iglesia evangélica — participaron en campañas conducidas a nivel nacional en apoyo de personas detenidas e internos en diversas cárceles. El consejo inter-confesional Religiones para la Paz, que se ocupó de intentar resolver problemas de justicia social, representó a todos los principales grupos religiosos. Figuras prominentes de la política local promovieron la libertad religiosa. Políticos no católicos ocuparon importantes cargos públicos.

Sección IV. Política del Gobierno de los Estados Unidos de América

Miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos se reunieron con miembros del gobierno, grupos religiosos y ONGs con el fin de discutir y promover la libertad y tolerancia religiosa, así como alentar al gobierno a revisar el reglamento a través del cual se implementa la Ley de Libertad de Religiosa.

Funcionarios de la Embajada se reunieron con grupos religiosos evangélicos para escuchar su preocupación sobre la posibilidad de que sus misioneros pudieran perder la posibilidad de tener una visa cuando el plazo para el registro de agrupaciones religiosas se cumpla el 18 de enero del 2013.

Funcionarios de la Embajada se reunieron con personal de la Dirección de Asuntos Inter-confesionales y de la Dirección de Asuntos Eclesiásticos del MINJUS, así

como con funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Defensor del Pueblo. Personal de la Embajada también se reunió con líderes de numerosas agrupaciones religiosas, incluyendo a representantes de la Iglesia Católica, agrupaciones de la Religión Protestante, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la Religión Musulmana y de la Comunidad Judía.

La Embajada continuó manteniendo un contacto permanente con organizaciones religiosas y organizaciones afiliadas a ciertas religiones, incluyendo, entre otras, a CARITAS, CEAS, el Comité Inter-confesional del Perú, el Consejo Nacional Evangélico del Perú, la agrupación evangélica Camino de Vida, la Unión de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú, la Asociación Evangélica Paz y Esperanza y el Instituto Libertad de Conciencia.